



COVID19

Balance internacional de una crisis distinta

El grupo COMbyCOM ha elaborado un informe país que recoge la situación creada por el COVID19 en América Latina y la Península Ibérica. Por supuesto, se trata del relato de la crisis sanitaria, pero también de sus consecuencias económicas, políticas y sociales. Una CRISIS que comparte muchos códigos con las crisis tradicionales y que también incorpora una singular idiosincrasia por la intensidad global que representa y por los cambios estructurales que puede generar en todo el planeta.

Esta visión internacional de conjunto incorpora la situación en Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, España, México y Portugal.

Índice

ARGENTINA La crisis apenas comienza <i>SHERPA COMUNICACIÓN</i>	3
BRASIL Crisis de Gobierno en la crisis sanitaria <i>GWA</i>	4
COLOMBIA Pendientes de la evolución <i>ECOVIGO</i>	6
ECUADOR La suma de crisis amenaza al Gobierno <i>ELEMENTO</i>	8
ESPAÑA Gobierno aislado en el peor momento <i>TORRES Y CARRERA</i>	11
MÉXICO La negación como huida hacia delante <i>STREMICSLAB</i>	14
PORTUGAL El triunfo de la oportunidad <i>GUESS WHAT - PORTO DE IDEIAS</i>	17



Argentina

La crisis apenas comienza

POR SHERPA COMUNICACIÓN

El viernes 3 de abril pasado se cumplió un mes desde el primer caso de coronavirus en Argentina. Entonces, el Ministro de Salud nacional, Ginés González García, y expertos en Sanidad esperaban que el COVID-19 se extendiera a partir de la llegada de otoño en Argentina.

Mientras la pandemia recién comenzaba en el país, la prensa y la opinión pública observaban con preocupación la crítica situación que atravesaba Europa -sobre todo Italia y España. La evolución de los casos en el país, la calificación como "pandemia" de la OMS y la situación alarmante en el resto de mundo provocaron el inicio de una primera etapa de contención del coronavirus en Argentina.

El 19 de marzo pasado, con 128 casos confirmados y tres muertos, el presidente Alberto Fernández anunció la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio y el cierre de las fronteras aéreas y terrestres.

A 20 días del aislamiento social, preventivo y obligatorio, Argentina tiene 1715 casos confirmados, de los cuales 1297 se encuentran activos, 358 recibieron el alta y 70 murieron. La curva de crecimiento de casos en el país avanza a ritmo lento pero la preocupación por la necesidad de incrementar los test a la población aumenta.

Desde el primer caso, el país lleva realizados hasta ayer 13.330

testeos, lo que equivale a 293,8 muestras por millón de habitantes.

El Estado se está preparando para una guerra. Ha montado hospitales de emergencia en campos, ha levantado carpas cerca de hospitales con el objetivo de aumentar la cantidad de camas disponibles. El cuello de botella se encuentra no sólo en la baja cantidad de respiradores que hay en el país, sino en los escasos recursos humanos para atender las terapias intensivas.

"Ganamos tiempo" es una afirmación del ministro de salud que tiene el respaldo de la comunidad médica en general. Sin embargo, la cuestión ahora será cómo se ejecutará el plan sanitario cuando la cuarentena generalizada ya no sea una opción económica viable.

ECONOMÍA AL BORDE DEL COLAPSO

La economía argentina se encontraba en terapia intensiva incluso antes de la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio. El peso argentino perdió dos tercios de su valor entre 2018 y 2019 y la inflación alcanzó el 53.9% en el último año, además la deuda externa se situó al 90% del PBI argentino.

Por ello, el 22 de marzo pasado, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió que "será necesario un alivio sustancial de los acreedores privados para restablecer la sostenibilidad con

alta probabilidad de la deuda argentina”.

En este sentido, el pasado 5 de abril el gobierno nacional resolvió postergar hasta 2021 los pagos de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública en dólares bajo legislación nacional, no susceptible a arbitraje internacional, calculada en unos 9.800 millones de dólares, debido a la pandemia. Simultáneamente, el ministro de economía nacional, Martín Guzmán, intenta negociar otros 68.842 millones de dólares bajo jurisdicción extranjera. Esta situación, según especialistas, ubica al país en un “virtual default”.

Los efectos de esta recesión son palpables en los sectores más vulnerables de la economía. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la pobreza se acerca al 35,5% de los argentinos y la indigencia se ubica en torno al 8%, además la desocupación alcanzó el 10,4%.

Estas cifras sumadas al empleo informal (34,5%) y a la falta de facturación de trabajadores independientes por estar paralizada la actividad económica, provocan una situación alarmante.

Uno de los puntos más criticados por parte de la opinión pública y la prensa hacia el gobierno nacional en su gestión de la crisis fue la falta de medidas orientadas a las pequeñas y medianas empresas.

Durante estos 20 días de cuarentena generalizada, las fuerzas de seguridad controlaron 1.393.914 personas, de las cuales 32.631 fueron detenidas, notificadas o demoradas por las fuerzas de seguridad por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Según la Ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederic, existe apenas un 2 por ciento de infractores en el país.

Sin embargo, en las últimas dos semanas se ha percibido un descontento con el Gobierno:

- Cacerolazos en barrios de Capital Federal y centros urbanos provinciales. Durante la semana pasada se registraron una serie de cacerolazos, que exigían que la clase política se reduzca los sueldos.
- Filas multitudinarias en las sucursales bancarias. La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y el Banco Central de la República Argentina dispusieron la semana pasada la apertura especial de bancos, de forma tal que jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales que no

poseen tarjeta de débito puedan retirar dinero en efectivo. La falta de previsión por parte del sector público y privado provocó filas masivas de grupos de riesgo en distintos puntos del país que generaron la desconfianza e indignación de la opinión pública y la prensa.

- Precios excesivos en la compra de insumos para comedores sociales. El diario La Nación denunció el lunes pasado al Ministerio de Desarrollo Social nacional por haber comprado con “sobrepuestos” algunos alimentos destinados a los comedores sociales en todo el país, en el marco de una licitación pública. El Gobierno primero defendió lo actuado, y luego ante la presión pública, echó a 15 funcionarios. Puede ser éste un primer caso de corrupción, y dejó al Gobierno en una situación incómoda.

Si bien la unidad aún es palpable en la inmensa mayoría de la clase política argentina, lo cierto es que estos tres conflictos provocaron una interna aún entre las filas del propio oficialismo.

EL COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA

Argentina comenzará una nueva etapa de contención del coronavirus a partir de este lunes 12 de abril. Las medidas restrictivas de aislamiento social se extenderán fundamentalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y los grandes centros urbanos provinciales, regiones que concentran más de dos tercios partes de la cantidad de contagiados del país.

En el resto del país comenzará un intento de reactivación económica segmentado por industria y con el “distanciamiento social” como bandera del empresariado y de la política argentina. Ello implica la aplicación de diferentes medidas orientadas a respetar las distancias entre las personas y la aplicación de turnos rotativos para desconcentrar en la mayor medida posible la cantidad de personas dentro de las empresas y el transporte público.

La profunda crisis económica del país y el ritmo de evolución de los casos de coronavirus lleva a las autoridades nacionales a pensar en alternativas a la cuarentena generalizada. La cuestión, ahora, será determinar qué actividades podrán funcionar sin incrementar la subida exponencial de los casos para que no colapse el sistema sanitario argentino.



BRASIL

Crisis de Gobierno en la crisis sanitaria

POR GWA

En Brasil, el primer caso de coronavirus se registró en la última semana de febrero. Fue un caso de los denominados importados, un ejecutivo de São Paulo que regresaba de un viaje de negocios por Europa. Afortunadamente, este paciente cero logró superar la enfermedad. Dos meses después, el Ministerio de Salud, ha corregido esta información, afirmando que el primer registro del COVID19 en Brasil ocurrió, de hecho, el 23 de enero.

Hasta el 10 de abril, Brasil ha superado la barrera de 20,000 casos confirmados (hay un número similar de pruebas esperando resultados) y más de 1,000 muertes. São Paulo, la ciudad con mayor población del país y donde se ubican los dos aeropuertos más concurridos, registra más de 8 200 personas infectadas y más de 500 personas fallecidas.

ESTRATEGIA DE NEGACIÓN

Brasil está experimentando un momento muy particular en su historia, especialmente en lo referido al combate contra el COVID 19. El presidente de la República, Jair Bolsonaro, inicialmente siguió la estrategia del presidente estadounidense, Donald Trump, y minimizó tanto la naturaleza del virus como su devastador alcance entre la población.

En esas primeras semanas, Bolsonaro decía que el coronavirus era

un simple resfriado. No haría daño a nadie y que todo el mundo debía actuar con normalidad: utilizando servicios de transporte público, comiendo en restaurantes, yendo a centros comerciales, viajando, trabajando. Todo normal.

Incluso cuando los casos comenzaron a proliferar, con números preocupantes, y se registró la primera muerte, el presidente no modificó su discurso y continuó dando malos ejemplos a la población visitando mercados abiertos, “promoviendo” aglomeraciones y saludando a las personas con apretones de manos.

Aún hoy, las medidas de distanciamiento social y confinamiento promovidas por el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, siguen sin convencer demasiado al presidente de la República que ha centrado su atención en el mantenimiento de la actividad económica.

PREPARACIÓN SANITARIA

Esta divergencia en el poder ejecutivo ha generado una crisis de Gobierno dentro de la crisis sanitaria que amenaza al país. El pasado lunes 6 de abril, se especuló durante todo el día que el ministro Mandetta sería cesado. Al final de la jornada esto no sucedió debido a la presión de los poderes Legislativo y Judicial y también de las

fuerzas militares. De momento, el ministro sigue al frente de la confrontación con COVID 19.

La inestabilidad política no se registra solamente en el seno del Gobierno de la nación. La gran mayoría de los gobernadores y muchos los alcaldes de las principales ciudades han tomado la decisión de no escuchar al presidente Bolsonaro, y han promulgado regímenes de aislamiento social, que sigue un promedio del 40% de la población, frente al 70% que según los epidemiólogos sería el mínimo aconsejable para paliar los efectos de la pandemia.

La expectativa es que el pico de casos se producirá dentro de dos semanas, con una duración prevista de un mes.

Incluso considerando los problemas relacionados con la compra y entrega de insumos (equipo de protección personal, gel de alcohol, respiradores, medicamentos, entre otros), muchas ciudades y Estados, al menos, han logrado crear las condiciones necesarias para actuar durante el pico de los casos.

De esta manera, los hospitales han liberado más UCI para atender específicamente a los infectados de COVID19, se han establecido hospitales de campaña y se han conectado redes de laboratorios para aumentar la capacidad de realizar pruebas.

Aun así, se contempla la posibilidad de que se endurezcan las restricciones a la movilidad de personas y vehículos, con la promulgación de bloqueos de vías públicas. Todo para evitar la saturación de la capacidad de atención de los hospitales.

UNA ECONOMÍA CONVALECIENTE

El impacto económico, a pesar de los esfuerzos de Bolsonaro por intentar mantener la actividad, está siendo muy fuerte. En realidad, esta situación no es achacable específicamente al COVID19, ya que, en los últimos meses, Brasil viene registrando un desempeño muy pobre.

El país parecía estar dejando atrás la situación de recesión en la que había entrado en los últimos años del gobierno de Dilma Rousseff, pero, en realidad, apenas se ha podido ir más allá del 2% del crecimiento anual del PIB.

El año pasado, la evolución del PIB de Brasil fue del 1,2% y en 2020 se esperaba alcanzar el 2,5%, lo que sería especialmente importante para la reducción del desempleo, actualmente justo por debajo del 12%.

Con una buena parte de la actividad económica suspendida o a un ritmo lento (se prohíbe la operación de varias actividades), ya hay analistas que pronostican una retracción del orden del 5% en el PIB. Y todos tienen dudas sobre cómo tendrá lugar la reanudación de la actividad económica, después de un largo período de cuarentena.

Para intentar minimizar estos impactos, el Gobierno Federal ha lanzado varias medidas y líneas de recursos que suman más de R\$ 400 mil millones (algo así como el 7% del PIB). Y a estos valores deben agregarse las acciones tomadas por Estados y Municipios.

Es el mayor paquete de ayuda pública de la historia de Brasil. Por supuesto, conllevará un aumento de la deuda pública, la mayor parte de los analistas económicos coinciden en señalar que "la causa lo justifica".

En términos políticos, las elecciones municipales están programadas para octubre. Pero hay propuestas para posponer las campañas (que deberían comenzar en junio) e incluso el período de votación.

Ajeno a todo este contexto, el presidente de la República mantiene un comportamiento que no coincide con la criticidad del momento: por un lado, continúa defendiendo el fin del aislamiento y por otro, defiende de manera entusiasta el uso masivo de cloroquina. Un tratamiento que también defiende Donald Trump por su inmediatez y bajo impacto económico. El problema es que se trata de una propuesta cuestionada por la falta de evaluaciones técnicas y de las pruebas clínicas necesarias.



COLOMBIA

Pendientes de la evolución

POR ECOVIGO

Desde que se hizo pública la difícil situación que está viviendo Europa en relación con los enfermos y muertos que ha dejado el Covid19 en ese continente, el país suramericano prendió las alarmas. Tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales entendieron que se enfrentan a una bomba de tiempo que en caso de no ser controlada podría ser letal. El 6 de marzo el Ministerio de Salud confirmó el primer caso detectado en el país, una joven colombiana que había estado días antes en Milán, Italia, y cuya prueba para el covid-19 fue positiva.

Hoy, un mes después de ese primer anuncio los colombianos apenas están sintiendo y entendiendo la gravedad de la situación. Parece que, para Colombia, la historia apenas comienza.

UN SISTEMA DE SALUD EN CUIDADOS INTENSIVOS

Los expertos coinciden en que la mayor preocupación es que el sistema de salud público no funciona, los recursos con los que cuenta no son suficientes y un incremento en el número de contagios puede ser letal y llevaría a su colapso.

Según las últimas cifras reportadas el 7 de abril, hay 1780 personas contagiadas, 50 personas muertas y 100 personas recuperadas en todo el país. Bogotá es la ciudad donde se concentran la mayor cantidad de casos. Esas cifras parecen no ser muy representativas y los números no son tan grandes como en otros países. Sin embargo, la realidad es que los números llevan por lo menos una semana de retraso y el gobierno necesita mejorar su capacidad de realizar pruebas. Hoy el promedio de pruebas que realiza el país por cada 100 mil habitantes es de 42, muy por debajo de las que realizan países como Noruega, Austria, Israel, Canadá o Dinamarca, con

entre 800 y 1800 pruebas diarias, según las cifras publicadas en worldometers.

A pesar de todas las barreras, parece existir una ruta clara y un camino a seguir. Mientras los colombianos están en cuarentena hasta el próximo 26 de abril, la cual inició el pasado 24 de marzo, en cada región de Colombia se está trabajando en cinco aspectos que se consideran claves para enfrentar la emergencia y levantar la cuarentena nacional: aumentar la capacidad de las UCI, adecuar espacios adicionales para atender enfermos, aumentar la cantidad de pruebas para diagnosticar los contagios, incrementar la capacidad de los equipos que prestan atención domiciliaria, y construir una red capaz de hacer vigilancia epidemiológica en todo el país.

Para cumplir con estos objetivos, el gobierno nacional y los mandatarios locales están inyectando capital económico y humano. Se incrementaron las partidas para el sector salud, se están adecuando grandes espacios culturales para que sean utilizados como hospitales, se hizo un llamado a todos los profesionales de la salud que están en último año de carrera y a quienes ya están pensionados para sumarse como miembros activos a la red de salud, se bajaron los aranceles a las importaciones de productos médicos, se hizo una gran compra de test para detectar contagios y se activaron canales de diálogo permanentes con países como Corea, con el fin de recibir recomendaciones que permitan adaptar el modelo coreano a la realidad colombiana. Los objetivos son ambiciosos, pero deben ser cumplidos o de lo contrario la red de salud no será capaz de atender a la cantidad de contagiados que se espera esté cerca de los 4 millones de colombianos, es decir el 8% de la población total del país.

Los datos entregados hasta el momento por el Ministerio de Salud indican que, por ahora, las medidas tomadas para la contención del virus están funcionando. Si se comparan los datos de Colombia con otros lugares, parece que el plan está marchando según lo esperado. La decisión de adoptar una cuarentena nacional ha permitido que no se disparen los casos. Por ejemplo, un mes después del paciente 0, Madrid tenía 14.000 personas contagiadas y más de 1800 muertos mientras que en toda Colombia, después de un mes, la cifra de contagiados apenas está por encima de los mil y los muertos no llegan a los cincuenta.

LA LUCHA POR EL LIDERAZGO

La falta de liderazgo del presidente Iván Duque marcó el inicio de este periodo de crisis nacional. Los alcaldes y gobernadores de todo el país fueron los primeros en tomar decisiones que permitieran hacer frente a la ola de contagios que se espera tenga Colombia. Los mandatarios locales y regionales, bajo el liderazgo de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tomaron la decisión de hacer simulacros de aislamiento y cuarentenas antes de que la medida fuera decretada a nivel nacional por el presidente.

Desde el 20 de marzo que se empezaron a tomar las medidas a nivel local, la opinión pública se polarizó entre los que respaldaban las acciones de los mandatarios locales y aquellos que fieles al presidente, pedían esperar la respuesta del ejecutivo. En televisión se presentaban alocuciones, casi en forma simultánea, del presidente y la alcaldesa de la capital. En las redes sociales también era evidente que había “dos bandos” en el país. Unos que pedían medidas rápidas y validaban la actuación de los alcaldes y otros que pedían calma y que llamaban a la prudencia a los gobernantes locales.

En momentos de crisis, la recomendación es tomar medidas rápidas y acertadas en clave. Por el contrario, se afirma que cada momento de silencio o de demora puede incrementar el peligro de que la bomba estalle, y además es un síntoma de falta de liderazgo. En el caso colombiano, el presidente se demoró en dar línea y los mandatarios locales tomaron ventaja. Cuando Duque sacó su decreto para centralizar las decisiones en cabeza de la presidencia, varios alcaldes y gobernadores lo interpretaron como una desautorización a sus medidas preventivas locales y como una señal desesperada por recuperar un liderazgo que había perdido por la lentitud en su toma de decisiones.

La gran ganadora de este escenario fue sin duda la alcaldesa de Bogotá Claudia López que, contrario al presidente, no demoró en mostrar liderazgo y tomar decisiones. Frente al decreto presidencial que decía claramente “el que decide aquí soy yo”, la alcaldesa declaró que “ese no es el momento de las competencias y de las vanidades infantiles, sino de cuidarnos”.

En la misma línea de actuar a paso lento “pero seguro”, parece estar el legislativo. El Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo y los congresistas siguen sin sesionar. Aunque el presidente dio vía libre y autorizó las deliberaciones remotas, el Congreso aún no ha sido capaz de retomar sus funciones. Esto implica que la agenda política del país también está en cuarentena. No se están discutiendo las iniciativas y proyectos de ley que son claves para el país y que hacen parte de la apuesta política del gobierno, como son la reforma a la justicia o la reforma pensional.

Pese a todo lo anterior, una encuesta de una reconocida firma demuestra que en general más del 60% de los colombianos aprueba la gestión del presidente, mientras que la aprobación para los mandatarios locales alcanza cifras de aceptación mayores al 70% y en el caso de la alcaldesa de Bogotá, esta cifra llega al 82%. En este sentido, esta crisis ha puesto a prueba la capacidad de acción y liderazgo de todos los mandatarios del país, y aunque en ocasiones el panorama político nacional se ve como una carrera entre liebres y tortugas, lo cierto es que se han tomado las medidas que han recomendado los expertos, así lo reconocen los ciudadanos, y parece que, en la práctica y después de varios “malentendidos”, el gobierno nacional y los gobiernos territoriales están trabajando juntos.

UNA ECONOMÍA EN JAQUE

La misma falsa dicotomía que se está presentando en el mundo, también se presenta en Colombia. A pesar de que hay claridad sobre la importancia de cuidar a las personas y salvar sus vidas, la economía del país, a pesar de ser sólida, no está preparada para afrontar la crisis económica que se espera se desate en los próximos meses.

Con el frenazo casi total a la economía que ha significado la cuarentena, solo están trabajando los sectores indispensables, y los bajos precios del petróleo, se espera que en el mejor de los casos el PIB del país crezca cerca del 2,3 %, casi un punto por debajo de lo que se prevía antes de la crisis. No obstante, dependiendo del manejo y las consecuencias que se registren, esta cifra podría caer al 1,2 %, y, en el peor de los casos, habría una desaceleración de la actividad económica del -0,4 %, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo.

Por su parte, se espera que el desempleo llegue en promedio al 15,4 % o incluso al 19,5 % en el peor de los casos. No obstante, estas cifras están un poco lejos de la realidad del país, ya que en Colombia el empleo en su mayoría es de carácter informal y una gran cantidad de personas que quedaran sin ingresos no están contempladas dentro de estas cifras. Lo que implica que, en el corto plazo, una gran proporción de los colombianos necesitará de la ayuda del gobierno para sobrevivir.

A lo anterior se suma una problemática adicional que ya venía afectando al país, la migración de venezolanos. ¿De dónde saldrá el dinero para ayudar tanto a colombianos como venezolanos que están en riesgo? Los auxilios anunciados por el gobierno nacional no son suficientes, si bien están focalizados en atender la población más vulnerable pronto habrá que poner en marcha programas que ayuden a que los micro, pequeños, medianos y trabajadores independientes del país recuperen sus ingresos.

La economía colombiana está en jaque, por eso como dice Salomon Kalmanovitz, uno de los economistas más reconocidos del país, no hay tiempo de ortodoxia económica. “No es tiempo de equilibrio fiscal ni monetario. Por el contrario, es la hora de que el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda tomen medidas drásticas que aporten recursos gigantescos para que el Estado pueda actuar en todos los frentes necesarios de esta guerra contra la pandemia, que está haciendo estragos en la economía”.



ECUADOR

La suma de crisis amenaza al Gobierno

POR ELEMENTO

Previo a la emergencia sanitaria, Ecuador venía atravesando tiempos complejos en lo político y económico y una creciente conflictividad social, hechos que en la actualidad han dificultado la gestión de la emergencia por el COVID-19, como lo han evidenciado medios internacionales. Para comprender de mejor manera el desenvolvimiento de la pandemia en Ecuador, hay que entender el pasado político, económico y social inmediato que atravesaba el Gobierno.

PERSPECTIVA POLÍTICA

Gobierno de transición: El Gobierno se autodefinió como uno de transición y de profundas reformas estructurales, sobre todo en el modelo económico implementado por su predecesor. Para ello, se impuso varios objetivos entre los cuales estaban reducir el gasto público y el déficit fiscal, gestionar de manera eficiente los activos públicos y brindar mayor apertura al sector empresarial. El discurso político en el que se basó su agenda fue la lucha contra la corrupción, reinstitucionalización del país y “descorreizar el Estado”, en palabras de miembros del Gabinete.

- Aprobación y credibilidad: Tras casi 3 años de Gobierno, Lenín Moreno y su equipo se han tenido que enfrentar a un descenso en encuestas. A pocos meses de su mandato, en diciembre de 2017, la aprobación de la gestión y credibilidad del presidente

alcanzaron un 70%, una de las más altas en los últimos años desde la vuelta a la democracia. Actualmente, dependiendo de la encuestadora, la aprobación oscila entre el 8% y 20%. Según la encuesta regional Mitofsky realizada entre el 22 y 25 de marzo de 2020, Moreno ocupa el último lugar en el manejo presidencial de la crisis con un 14% y 86% que no cree en las cifras de contagiados entregadas por el Gobierno.

Esta falta de credibilidad le pasa factura al Gobierno precisamente en un momento donde para manejar de manera adecuada la crisis sanitaria, debe proporcionar mensajes claros y concisos que sean receptados por la ciudadanía para cumplir sus recomendaciones. Adicionalmente, tras las protestas de octubre de 2019, se rompió el vínculo entre medios de comunicación y ciudadanía, lo que ha provocado que actualmente las personas busquen información de medios alternativos como las redes sociales, dificultando de esta manera comunicar las acciones del gobierno para manejar la emergencia sanitaria.

- Gobernabilidad: Tras dar marcha atrás en la eliminación de subsidios por las protestas de octubre en 2019, el Gobierno sufrió una serie de reveses políticos, como el rechazo en la Asamblea Nacional del Presupuesto General del Estado para el 2019 y el 2020, así como el archivo de la ley económica

presentada en el cuarto trimestre de 2019, que contenía algunas de las reformas estructurales planteadas en el Acuerdo con el FMI. Actualmente, con una nueva reforma económica en camino, el Gobierno debe buscar nuevas alianzas que le permitan alcanzar una mayoría para aprobar el texto en Asamblea, ya que hace pocos meses finalizó el acuerdo legislativo entre la bancada oficialista, CREO y bloques independientes. Incluso, el bloque partidista tuvo varias desafiliaciones hasta de asambleístas que lo habían acompañado desde el Gobierno anterior, como María José Carrión, quien presidió la Comisión de Fiscalización.

- **Horizonte electoral.** Ecuador entra en elecciones presidenciales y legislativas en 2021 y la carrera por ocupar el sillón presidencial estaba ya en marcha previo a la emergencia sanitaria. Esto ha complicado su gestión debido a la búsqueda de protagonismo de varios actores políticos, llegando a existir una disputa entre el Gobierno Nacional y las Alcaldías, incluso con la Asamblea Nacional, que ha visto en esta crisis una plataforma para buscar la reelección en 2021, y en un acto difícil de conseguir, todas las bancadas legislativas se unieron para solicitar el no pago de la deuda. Desde el Gobierno se ha intentado posicionar al vicepresidente como el líder detrás de la gestión, siendo objeto de reconocimiento y críticas por parte de la ciudadanía.

Este contexto político evidencia el por qué la falta de respuesta del Gobierno, la falta de coordinación con instancias locales como Alcaldías y Prefecturas y la dificultad para comunicar y conseguir el apoyo de la ciudadanía, dado que en esta emergencia sanitaria es vital la colaboración de la población para mitigar los efectos del COVID-19. También, la falta de gobernabilidad dificulta que el Gobierno adopte medidas en conjunto con el Legislativo para superar la emergencia sanitaria y pensar en un escenario post-COVID-19.

PERSPECTIVA ECONÓMICA

El Ecuador venía atravesando serios problemas fiscales desde el 2015, sin embargo, en palabras del expresidente Correa dejaba “una economía en crecimiento”. En 2017 Lenín Moreno reconoció que “no había mesa servida” pues “todo se había ido en la corrupción”.

De esta manera, el Gobierno se impuso el objetivo de mejorar la imagen internacional del Ecuador, recuperar la confianza de organismos multilaterales y así captar inversión extranjera que promueva el empleo en el país. Sin embargo, 4 factores complicaron el panorama económico del Ecuador en el contexto de la crisis: la apreciación del dólar, el riesgo país, el precio del petróleo, el empleo informal y el sector fiscal.

El riesgo país del Ecuador sobrepasó los 1000 puntos en noviembre de 2019 y llegó a su máximo de 6.063 el 23 de marzo, ubicándose en el segundo lugar, sólo por debajo de Venezuela y superando a Argentina. Esto limitó seriamente el acceso a los mercados internacionales para obtener créditos que solventen la liquidez del país durante la emergencia sanitaria.

Los ingresos del Gobierno están siendo mermados por una previsible caída en la recaudación tributaria, fruto de la crisis sanitaria y la

reducción del precio del petróleo, fruto de una guerra de precios a nivel mundial. En el PGE 2020 se estimó un precio del barril del petróleo de USD 51,30. El precio llegó a ubicarse en alrededor de los USD 20, en las últimas semanas, y debido a la penalización del crudo ecuatoriano que es de entre \$4 y \$5 por barril, este se vendía entre USD 15 y USD 16, cuando el costo de producción, según el ministro René Ortiz, es de USD 24 aproximadamente.

Para acceder a más financiamiento, el Gobierno decidió pagar el 24 de marzo USD 300 millones de dólares en intereses de los bonos 2020, dando de esta manera un mensaje de confianza a los mercados internacionales y obtener acceso a USD 2500 millones de financiamiento externo y destinarlos al fortalecimiento del sistema de salud público.

El último factor es el empleo informal que, según datos de la CEPAL, no solo Ecuador sino toda la región venía atravesando un incremento en la desigualdad, en la pobreza extrema y el deterioro en la calidad del empleo. Por lo que el impacto de las medidas de distanciamiento social sobre el empleo podría ser mayor, debido al deterioro de la composición del trabajo, las altas tasas de empleados por cuenta propia y la informalidad.

MANEJO DE CRISIS

Dado ese contexto, el mes de abril llegó con 1 millón de infectados a nivel mundial y más de 4900 infectados hasta el 9 de abril. El 29 de febrero se detectó el primer caso positivo de COVID-19 y desde entonces, la ciudad de Guayaquil se convirtió en el epicentro de la infección y reveló los problemas de coordinación y respuesta del Estado. Además, ciertos eventos repercutieron de manera negativa en estas capacidades.

En primer lugar, El presidente Lenín Moreno aceptó la renuncia de la ministra de Salud Catalina Andramuño el 21 de marzo, quien en su carta de renuncia alegó que le resultaba “inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimientos de salud”; además que enfrentar una emergencia sanitaria sin recursos es “complicado”, alegando que “no se ha recibido ninguna asignación presupuestaria por parte de la autoridad competente, para el manejo de la emergencia”. Esto sumado a la baja credibilidad del gobierno, aumentó la especulación de la ciudadanía en cuanto a la veracidad de las cifras oficiales.

En segundo lugar, en un suceso inusitado Ecuador ha sufrido un desbordamiento en el manejo de los fallecidos, lo que ha provocado otros problemas sanitarios y sociales en Guayaquil. Ante este problema, el Gobierno declaró que existen varios fallecidos sin confirmar que sean de COVID y creó un grupo de Fuerza de Tarea para resolver la problemática, dirigido por el presidente del Banco de Desarrollo del Estado Jorge Wated.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

El gobierno enfocó su respuesta en tres frentes: sanitario, económico y social. En lo sanitario, declaró la emergencia sanitaria el 17 de marzo, a partir de lo cual ha canalizado recursos de organismos multilaterales por USD 100 millones para la compra de equipamiento médico, ampliación de la capacidad de hospitales y laboratorios privados para el procesamiento de pruebas y contratación de personal médico.

En lo económico, se actuó en 3 ámbitos. En lo laboral se modificó la normativa laboral para permitir la suspensión, reducción o modificación de la jornada laboral y permitiendo a través del mutuo consenso entre empleado y empleador llegar a un acuerdo sobre el pago de los salarios.

En lo financiero se permitió la moratoria, novación o refinanciamiento de créditos/deudas con banca pública y privada, así como créditos para PYMES a través de la banca pública.

En lo fiscal, se permitió el diferimiento a 6 meses sin intereses del IR del ejercicio fiscal de 2019 e IVA generado en marzo, abril y mayo. Además, con Decreto Ejecutivo 1021 se establece una retención sobre el ingreso mensual: a) 1.75% para instituciones financieras y telefónicas. b) 1.5% para empresas de exploración y explotación de hidrocarburos. Este valor constituirá crédito tributario para la liquidación y pago de impuesto a la renta del 2020.

En el sector externo, se otorgó flexibilidad en tiempos y requisitos para regímenes de exportación e importación en aduanas y el diferimiento temporal del 0% de aranceles para las importaciones de insumos de salud.

En lo social, el gobierno se ha enfocado en atender a las familias más vulnerables, planificando la entrega en un primer momento de 97.000 kits de alimentación, así como USD 100 millones en créditos quirografarios de emergencia. Cada persona podrá acceder hasta un máximo de USD 2.500, con tasas de interés que varían entre el 6,5% y el 8,5%. La primera cuota se pagará en julio de 2020. Por

último, se implementó el Bono de Contingencia del Gobierno (USD 60 a pagarse en abril y mayo) para 400.000 personas.

PERSPECTIVAS

La crisis sanitaria mundial desatada por el COVID-19, ha reducido considerablemente las perspectivas de crecimiento mundial. La CEPAL estima una caída de entre el 3% y 4% del PIB mundial. Además, el Organismo Internacional menciona que la magnitud del impacto dependerá de la eficacia de las medidas de contención, sanitaria y fiscal.

Asimismo, el vicepresidente estimó que la emergencia sanitaria "costará no menos de 2 puntos del PIB" (USD 2 200 millones). Agencias calificadoras de riesgo auguran una reducción del PIB de entre 3% y 6%, al mismo tiempo que han rebajado la calificación de los bonos soberanos de Ecuador a B+ con perspectiva Negativa.

Sin embargo, el gobierno ha asegurado el continuo funcionamiento de los sectores estratégicos. De la misma manera, se prevé un aceleramiento en los procesos de concesión de activos públicos en los sectores energéticos para obtener liquidez.

Por otro lado, el gobierno ha demostrado predisposición por impulsar la integración regional en base a lo comercial. Por lo que sería previsible una mayor apertura del Ecuador hacia los acuerdos comerciales con otros países o bloques, como Estados Unidos o la Alianza del Pacífico.



ESPAÑA

Gobierno aislado en el peor momento

POR TORRES Y CARRERA

En España, el 8 de marzo ya se habían contagiado más de 600 personas del COVID19. Treinta habían recibido el alta y 18 habían fallecido. Apenas un mes más tarde, la cifra de infectados ascendía a más de 135.000, los muertos se elevaban hasta 13.055 y el número de altas era de 40.437.

La sanidad pública española pasa por ser una de las mejores de la UE. En términos de asistencia su vocación es universal, por tanto, ningún ciudadano corre el riesgo de no ser atendido. Sin embargo, a raíz de la crisis económica global desatada en 2008, el tejido sanitario ha sufrido muchos recortes. Aunque los recortes han sido generales no se han experimentado por igual en todo el Estado. Esto es así porque la sanidad es uno de los ámbitos que están transferidos a las Comunidades Autónomas. De facto, existen 17 circunscripciones sanitarias en el país.

Una de las primeras medidas adoptadas por el Estado de Alarma decretado el pasado 14 de marzo fue crear un mando único centralizado de todos los aspectos de gestión del país, empezando por la sanitaria. Un mando único, comandado por el Ministerio de Sanidad, que paradójicamente es uno de los menos dotados en efectivos y presupuesto en cualquier Gobierno de España.

El primer problema que enfrentó el ministro Illa fue precisamente el de coordinar de manera armónica a 17 consejeros de salud. Estas

dificultades, primero tuvieron que ver con la vocación autosuficiente de algunos de ellos (pe. Euskadi, Cataluña o Madrid) y después con la falta de material básico de protección o con las insuficientes dotaciones de las unidades de cuidados intensivos.

En la estrategia sanitaria del Gobierno, el confinamiento ha sido clave. Desde un primer momento, esta medida se ha mostrado como la más eficaz a falta de una vacuna que prevenga el contagio. Con las sucesivas prorrogas del confinamiento, el Gobierno ha procurado evitar el colapso de la red sanitaria y proteger, en la medida de lo posible, a los profesionales de la salud que operan en la primera línea de defensa contra el COVID19.

El colapso se ha rondado. Algunos hospitales y algunas regiones lo han vivido muy de cerca, pero aparentemente parece que en esta oleada se ha sorteado. La salvaguarda de los profesionales sanitarios ha tenido menos éxito. Sus guardias infinitas, una de las claves para evitar el colapso, los han sobreexpuesto al contagio. Una situación de riesgo que se ha visto amplificada por la ausencia de material de protección adecuada. El 7 de abril, apenas un mes después del estallido del COVID19 en España, casi 20.000 contagiados pertenecen a este estratégico colectivo.

En términos de investigación, distintos centros tecnológicos, grupos de investigación de universidades y centros hospitalarios compiten

en la carrera mundial por descubrir y producir industrialmente la primera vacuna eficaz contra el COVID19 y sin efectos secundarios que puedan poner en riesgo al paciente. Las voces más optimistas dibujan un horizonte de un año para que esto pueda ocurrir.

POLÍTICA: CONSENSOS IMPOSIBLES

La declaración del Estado de Alarma arrancó en España con ligeras críticas del principal partido en la oposición (Partido Popular) por la demora en la adopción de esta medida. En el mismo sentido se manifestó el presidente de la Generalitat de Cataluña (Quin Torra) aunque su repercusión fue más enfocada hacia el ámbito internacional (entrevista en la BBC criticando al Estado español) que en el nacional).

Las críticas hacia el Gobierno (PSOE -centro izquierda- y Unidas Podemos -extrema izquierda-) se han ido haciendo más intensas a medida que ha avanzado la crisis. En resumen, estas han sido cronológicamente las acusaciones y las respuestas del ejecutivo de Sánchez.

Celebración del 8M. Especialmente procedentes de los partidos de todo el arco parlamentario de la derecha. Se acusa al Gobierno de haber propiciado el contagio al permitir la celebración de las manifestaciones del Día Mundial de la Mujer. En los siguientes días, dos ministras y la mujer del propio Sánchez dieron positivo en coronavirus.

La réplica del Gobierno es que siguió indicaciones de su comité de expertos y científicos y que nadie en la Unión Europea actuó de manera distinta. También replican que VOX (extrema derecha) celebró un mitin multitudinario y que el PP envió un nutrido grupo de parlamentarias a la convocatoria del 8M en Madrid.

Uso del ejército. Los nacionalistas catalanes y vascos criticaron al Gobierno tanto por la asunción de un control centralizado de sus sistemas sanitarios (en España los servicios sanitarios dependen de cada región) como por el empleo del ejército en tareas de vigilancia, desinfección y servicios logísticos.

La réplica del Ejecutivo fue que la dimensión de la crisis obligaba a una gestión centralizada para coordinar todos los recursos públicos (y privados, que fueran necesarios) así como el empleo del Unidad Militar de Emergencia -a la que se han ido sumando otros efectivos de las Fuerzas Armadas- como refuerzo de Policía nacional y local y Guardia Civil.

Compra material sanitario. Prácticamente todos los partidos con representación parlamentaria fuera del Gobierno han criticado en algún momento la demora en la compra, llegada y distribución de material sanitario: especialmente mascarillas, guantes y respiradores automáticos. Del mismo modo, se ha criticado los sistemas de distribución entre las distintas regiones. El pico álgido de estas críticas se corresponde con la adquisición de una partida de hasta 600.000 test para detectar la enfermedad que estaban defectuosos.

La réplica del Gobierno se ha basado en las dificultades que se han encontrado en un mercado global totalmente colapsado, en que la

distribución interna siempre ha seguido un criterio de prioridades objetivas, y que la compra del lote defectuoso se subsanará bien con la devolución del dinero bien con la entrega de una partida en buenas condiciones.

Medidas económicas. Han sido, sin duda, el eje de las principales críticas dirigidas al ejecutivo. Proceden, sobre todo, de los partidos del espectro de derechas, pero también se han formulado por los nacionalistas vascos y catalanes. Se trata de medidas de un marcado carácter social que han intentado salvaguardar el empleo por encima de cualquier otra consideración. El titular ofrecido por la ministra de Trabajo (se prohíbe el despido durante el confinamiento) provocó un auténtico terremoto entre empresarios y partidos de la oposición. Desde estos ámbitos, se consideró que se había generado un clima de sospecha contra las empresas totalmente injusto.

La réplica. El Gobierno ha intentado atemperar los ánimos matizando sus declaraciones, pero aquí se evidencia el pulso entre la facción de Unidas Podemos y la socialista. No hay un mensaje único y claro.

Falta de consensos. A raíz del malestar generado por las medidas económicas, las voces críticas con el Gobierno se han intensificado en torno a la adopción unilateral de decisiones como la paralización total de la actividad económica (especialmente criticada por los nacionalistas vascos). Esta corriente ha roto la lealtad institucional comprometida al inicio de la crisis por todos los partidos presentes en el Parlamento español.

La réplica. Además de incrementar sus contactos, el Gobierno intenta frenar la convulsión política apelando a un gran consenso de Estado. Se apunta a la reedición de los Pactos de la Moncloa activados por el presidente Adolfo Suárez hace casi cuarenta años en plena transición hacia la democracia.

De momento, la valoración del Gobierno evoluciona mal según diversos barómetros. Dos encuestas recientes: Barómetro de 'ABC'/GAD3: dos de cada tres españoles creen que el Gobierno oculta información sobre el virus. El 60% habla de falta de previsión. Encuesta de Gesop/'El Periódico': la valoración gubernamental se desploma. Un 44% creía hace unos días que el Gobierno gestionaba bien la crisis y un 31,6% que lo hacía mal; la tendencia se ha invertido: ahora un 38,4% lo ve mal y un 32,5% bien.

Esta aparente desconexión ha llevado a Sánchez a buscar fórmulas de consenso recuperando el formato de los "Pactos de la Moncloa" que sirvieron hace 40 años para aglutinar a toda la esfera política española en una evolución pactada desde la dictadura franquista al actual sistema democrático. De momento, el actual llamamiento no ha tenido una calurosa acogida. El principal partido de la oposición -Partido Popular- ha evidenciado su escepticismo ante este llamamiento y parece poco probable que sume a esta iniciativa en su actual convocatoria.

ECONOMÍA: EL ABISMO DE LA UE

Los datos registrados en el mes de marzo reflejan el impacto extraordinario producido por la crisis sanitaria del COVID-19 en el empleo. Este episodio ha cambiado la tendencia en la evolución del paro con que se inició el mes de marzo. En los primeros 12

días del mes el número de desempleados registrados se había incrementado en 2.857 personas. Al término del mes, la lista de personas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal ha sumado 302.265 nuevos demandantes en marzo respecto al mes de febrero, lo que supone un aumento del 9,31%. Con este incremento, el total de desempleados en España se sitúa en 3.548.312.

A pesar de las medidas de defensa del empleo puestas en marcha por el Gobierno, las empresas se han visto obligadas a rescindir contratos como medida urgente para evitar su cierre. El tejido empresarial español está integrado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas y por trabajadores autónomos. Todas ellas comparten un denominador común: tesorerías muy ajustadas que apenas les conceden autonomía sin acudir a drásticos recortes en los gastos. El ejecutivo de Sánchez -supuestamente condicionado por Unidas Podemos- ha intentado utilizar a las empresas como freno del desmantelamiento económico: por un lado, les prohibía despedir, por otro, las ayudas prometidas no llegaban, tardaban en hacerlo o estaban llenas de trabas burocráticas. Y para completar el contexto, el Estado -con un déficit complicado- no se ha podido permitir ni la condonación ni la prórroga de los impuestos a las empresas. Conclusión: la cifra de paro de abril será peor que la de marzo.

Con todo, a esta situación que podría ser coyuntural hay que agregar el impacto de la crisis en el principal sector económico del país: el Turismo. España es el segundo país del mundo que más turistas acogió en 2019; 83 millones. Sólo por detrás Francia (90M) y por delante de EE. UU (79,6). La crisis del COVID19 no ha dejado ni

siquiera disfrutar del primer punto álgido de la temporada (Semana Santa) y el sector asume que tampoco podrá operar en verano. El año 2020 se da por perdido. La caída de la actividad económica, que la Confederación de Empresarios (CEOE) estima en un 50%, puede alcanzar el 75% en el Turismo. Un porcentaje que conllevaría la pérdida del 80% de los 2,8 millones de empleos que genera anualmente.

Con el sector de referencia dando por perdido el 2020, la economía española posiblemente enfrenta la peor crisis económica de los últimos 100 años. En este contexto, España ha hecho frente común con Italia y Francia para encontrar mecanismos de respuesta adecuados en el seno de la UE. Se intenta evitar una respuesta basada en la austeridad y el rigor presupuestaria como la que se dio a la crisis de 2008. Se razona que aquella fue una crisis económica y que ciertamente los países más afectados podían haberse alejado de la doctrina económica. Ahora, la crisis es sanitaria. Su estallido y control no está sujeta a dogmas económicos sino al principio de supervivencia tanto de los Estados afectados como de la propia Unión Europea. La brecha entre países ricos del norte y países pobres del sur, de no resolverse con consensos puede quebrar una unidad cada vez más inestable por insolidaria.

De momento, la UE ha salvado el primer match point con la habilitación de algo más de medio billón de euros para responder a la crisis sanitaria y a sus primeras consecuencias económicas. Sin embargo, las contrapartidas exigidas en las ayudas económicas garantizan semanas de inestabilidad e intenso debate donde la Unión seguirá jugándose su futuro.



MÉXICO

La negación como huida hacia delante

POR STREMICSLAB

Desde el momento que se comenzó a acercar el coronavirus a México, el Estado y la iniciativa privada han tomado acciones para prevenir que el contagio sea mayor en nuestro país; sin embargo, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido el más lento en actuar. Fue solo a partir de que se registró el primer caso de COVID-19 (28 de febrero 2020) en el país que se comenzaron a medir las repercusiones económicas, políticas y sociales que la pandemia podría generar; desde ese instante, la retórica se fue modificando poco a poco en algunas esferas del gobierno.

Con el paso de los días, las autoridades sanitarias comenzaron a mostrar preocupación por la ligereza con la que algunos ciudadanos tomaban el tema de la pandemia. Los mensajes desde la Secretaría de Salud se fueron haciendo más evidentes, hasta tal grado de tener que crear un personaje llamado "Susana Distancia" para que las y los mexicanos entendieran la importancia de la situación. No obstante, no todo era coordinación entre instituciones.

Mientras el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pedía a la sociedad tomar medidas para evitar el contagio, AMLO aparecía en un video diciendo "No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan, pero, si pueden hacerlo, y tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer...".

La organización entre poderes y gobiernos no era idónea para advertir, aclarar dudas y evitar la desinformación entre la sociedad mexicana. Fue por esto por lo que algunos gobernadores de algunas entidades del país comenzaron a tomar decisiones e implementar medidas propias. En México, el Artículo 40 de la Constitución establece que los estados son libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior, es decir, solo pueden decidir sobre lo que ocurre en su territorio y ámbito de competencia.

El panorama parecía y es desolador, enfrentar una crisis así con descoordinación entre los distintos niveles de gobierno del país, la polarización que vive la sociedad mexicana y la franja socioeconómica que existe, parece casi imposible de superar.

ECONOMÍA: PANORAMA DESOLADOR

El coronavirus y la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia han despertado las alertas en la economía mundial, tan solo para México el crecimiento se estableció en un rango entre -3.9% y 0.1%, siendo considerado como muy optimista esta perspectiva por analistas financieros; asimismo, el estimado para el PIB es de -2.9%, abandonando la idea establecida por el presidente de tener un superávit primario en cada año de su gobierno.

Bajo estas expectativas, la economía mexicana parecía estar en un

estado agónico y doliente, era por eso que empresarios, medios de comunicación y sociedad en general esperaban medidas fiscales urgentes para no ver afectada negativamente la actividad empresarial.

Con las perspectivas negativas sobre el país, se anunció de manera oficial un acto donde el presidente haría público un plan de reactivación económica. La iniciativa privada y los inversionistas vieron como una gran oportunidad este evento; sin embargo, vaya sorpresa que se llevaron.

Bajo el título “Informe del presidente de la República al pueblo de México”, Andrés Manuel presentó un mensaje lleno de expresiones optimistas, declaraciones asegurando que la crisis era transitoria y expresiones negativas en contra del modelo neoliberal.

Durante los 50 minutos que duró su mensaje advirtió que el empresariado no tendría ningún estímulo económico y que, en cambio, los programas sociales se expandirían, la paraestatal del gobierno (Pemex) recibiría 65mil millones de pesos y se profundizaría su campaña de austeridad, inclusive para esta última idea eliminó un derecho laboral -el aguinaldo- a las y los trabajadores de la administración pública.

Si a estas ideas les sumamos el escenario en el que AMLO se comprometió a no incurrir en déficit fiscal ni a contratar una nueva deuda para el país, el panorama no pinta nada positivo.

Las cúpulas empresariales se muestran preocupadas, reconocen que el paquete de medidas es insuficiente y lo consideran una decepción para las pequeñas y medianas empresas.

Aun teniendo un horizonte con estas características, se espera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria reculen sobre las decisiones del presidente, esta sería la única manera en la que el futuro económico de México no se vislumbrara tan nublado.

EL PAPEL DE LAS REDES SOCIALES

Cuando se combina la desinformación, la falta de transparencia, la poca claridad en los mensajes y las fake news, sorprendentemente las redes sociales (Twitter y Facebook) se convierten en el mejor aliado para generar cohesión social; contrario a lo que sucede cuando un tema es completamente politizado.

Desde enero, StreamicsLab ha mantenido un monitoreo constante sobre la conversación digital en torno al coronavirus en México; se han hecho cortes transversales en el tiempo para conocer y diferenciar el comportamiento de los usuarios que utilizan redes sociales.

En primera instancia, durante los primeros días de febrero y cuando el virus parecía lejos de llegar a nuestro continente, los contenidos en redes sociales para México ocupaban solamente el 7% de la conversación digital en español de América; el volumen era extremadamente bajo considerando que México es el país con mayor número de hispanohablantes.

La mayor parte de la conversación digital hacía seguimiento a las

declaraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la cobertura mediática. Aún con esto, la tendencia era descendiente, el problema del virus y enfermedad se veía lejano.

En estas fechas (30 enero) existió una baja cantidad de contenidos por usuario, evidenciando que el tema no motivó el diálogo ni la conversación. No obstante, a pesar de la baja participación, usuarios se identificaron como portadores de “información exclusiva”, la gran mayoría noticias falsas; esto último aunado a la poca comunicación del gobierno generó histeria en algunos grupos sociales provocando compras de pánico.

Después del primer análisis la conversación mantuvo el mismo volumen, fue hasta el 14 de marzo que se duplicaron los contenidos y la participación digital (29,558 contenidos y 18,407 usuarios). Con esta “escucha” en redes sociales nos percatamos que los mexicanos eran los que realmente compartían información sobre las medidas que se debían tomar para evitar la propagación de la enfermedad, incluso más que las autoridades sanitarias del país. Asimismo, existió una crítica generalizada a las personas que actuaban con pánico y la facilidad de los usuarios para caer ante las fake news. Los contenidos se dividieron en tres rubros, aquellos con carácter racional (53%), informativo (38%) y emocional (9%).

Algo que resulta interesante es que, por primera vez en todos los análisis realizados sobre temas políticos, económicos y sociales, no existió contenido humorístico (bromas y memes), dando a entender una preocupación real por la llegada del virus.

Se realizó otro corte transversal en el tiempo durante el periodo del 21 al 30 de marzo. En este análisis se tomó una muestra aleatoria de 43,7878 contenidos, esto se debió a que el penúltimo día de marzo se declaró la fase 2 en México.

Así como en los previos análisis, los contenidos relacionados al COVID mostraban un comportamiento a la baja, sin embargo, con el anuncio oficial, el volumen de datos repuntó. Fue con esta declaración que la información proveniente del gobierno comenzó a tener una línea más clara de acción, fue el subsecretario de salud, Hugo López Gatell el que se convirtió en el líder de opinión más importante dentro de la conversación y la figura más importante del gobierno, con incluso más menciones que el presidente.

El comportamiento digital se estabiliza una vez el tema se coloca en el imaginario colectivo de los internautas, fue por eso que del 29 de marzo al 6 de abril el volumen de datos disminuyó (32,106 contenidos); de no haber sido porque AMLO declaró que “el coronavirus vino a México como anillo al dedo”, los contenidos hubieran disminuido. Aún con esta polémica afirmación, los ejes temáticos, la información y el líder de opinión se mantuvieron constantes.

Una vez entendimos el comportamiento de los mexicanos en redes sociales, se puede comprender que estas plataformas han sido el aliado perfecto para combatir la desinformación y para generar ejes narrativos que sirvan como ayuda para frenar la pandemia, esto debido a la falta de la transparencia y el mal manejo de comunicación masiva por parte del gobierno.



PORTUGAL

El triunfo de la oportunidad

POR GUESS WHAT – PORTO DE IDEIAS

En Portugal, el primer caso se registró el 2 de marzo de 2020, y a partir de ese momento se adoptaron medidas generales de exclusión social y aislamiento, similares a las que han sucedido en otros países europeos. Las características de propagación exponenciales del coronavirus han propiciado un único camino para combatirlo: el aislamiento de las familias, la prohibición de la convivencia social y los límites de los viajes.

El período de cuarentena obligatorio ha sido inevitable para romper los ciclos de contagio y evitar una propagación (más) rápida y generalizada. En este sentido, la situación epidemiológica en Portugal, el 8 de abril, totalizó 13.141 casos confirmados, 196 casos y 380 muertes. En vista de estas cifras, en términos generales, se puede decir que el proceso en curso está experimentando pasos positivos en el crecimiento diario del número de casos y en la reducción de la propagación del virus.

Esta realidad se debe a una toma de decisiones muy temprana para combatir la pandemia de COVID-19. De hecho, el 13 de marzo, el Gobierno decretó la suspensión de actividades con estudiantes en las escuelas, y el 16 de marzo, en una iniciativa sin precedentes, Portugal y España reforzaron los controles en sus fronteras terrestres. Solamente los vehículos pesados han mantenido la autorización para continuar circulando, así como los vehículos que transportan trabajadores con actividades transfronterizas, pero con

control sanitario. Los mayores cambios se refieren al tráfico de ocio y turismo.

El 18 de marzo de 2020 pasará a la historia reciente de Portugal: el presidente de la República, después de los contactos preceptivos con el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, informó a los Miembros de la Asamblea de la República de una medida que ha cambiado la forma de vida de la sociedad, los hábitos y compromisos, suspendido diversos derechos, libertades y garantías, sin poner en peligro la democracia. El estado de emergencia se promulgó basándose en la verificación de una situación de calamidad pública.

El estado de emergencia cubría todo el territorio nacional y duraba 15 días, comenzó a las 00:00 horas el 19 de marzo de 2020 y terminaba a las 23:59 horas el 2 de abril de 2020. Más recientemente, el 2 de abril de 2020, la Asamblea de la República aprobó la propuesta del presidente de la República de renovar el estado de emergencia por otros 15 días, es decir, hasta el 17 de abril de 2020.

El estado de emergencia y su prorroga no ha recibido objeciones de los organismos consultados. Existe un consenso sobre que ha sido la forma más adecuada de detener la actual crisis sanitaria, garantizar la supervivencia personal y colectiva, y preparar al país

para lo peor en los próximos dos meses. Todo bajo la premisa de hacer todo lo posible para lograr una recuperación real.

En este marco, las medidas aprobadas por el Gobierno han tenido como objetivo principal ayudar a mantener el empleo, ayudar a respaldar la tesorería de las empresas y evitar situaciones de crisis empresarial. Con respecto a las medidas implementadas en el ámbito económico y fiscal, el Gobierno ha proporcionado una línea de crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas, ha creado varios sistemas de incentivos para las empresas, como la aceleración del pago de ayudas públicas, el aplazamiento de la amortización de subsidios reembolsables y la selección de los gastos generados por eventos internacionales cancelados. Finalmente, también se ha procedido a ampliar el plazo para la declaración de impuestos.

Simultáneamente, en el ámbito del Trabajo y la Seguridad Social, el Gobierno ha abordado medidas en el ámbito del régimen de siniestros, la simplificación del régimen de despidos y la suspensión del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, bajo la responsabilidad del Empleador.

LA SITUACIÓN POLÍTICA

A pesar de ser un gobierno minoritario del Partido Socialista, elegido en septiembre de 2019, esta crisis pandémica ha permitido su gestión del gobierno sin grandes diferencias en la Asamblea de la República. Al comienzo de este mandato, el PS logró que se aprobara el Presupuesto del Estado a pesar de la abstención de sus antiguos socios PCP y BE, más la Izquierda.

En un breve contexto, los llamados partidos tradicionales son el partido socialista, PS, el Partido Socialdemócrata, PSD, el Partido Comunista, PCP, el Centro Democrático y Social, CDS y el Bloco de Esquerda, BE. En las elecciones de 2019, la Asamblea de la República incorporó formaciones como Livre (izquierda), Iniciativa Liberal y Chega (extrema derecha).

A pesar de este amplio arco parlamentario, desde el inicio de esta grave crisis de salud pública, ha habido un amplio consenso entre los principales partidos políticos. El PSD, que es el principal partido de oposición, ha mostrado su apoyo al Gobierno al igual que el CDS. El PCP y Chega se han abstenido en la segunda prórroga del estado de emergencia y el único que ha votado en contra ha sido Iniciativa Liberal ya que no están de acuerdo con algunos aspectos que, en su opinión, violan las libertades individuales.

El hecho de que el Gobierno esté compuesto solo por elementos relacionados con el Partido Socialista, con una tradición democrática bien conocida, tranquiliza respecto a la gestión que se pueda hacer del estado de emergencia. Aunque hubiera una gran presión de sus antiguos aliados de izquierda para adoptar medidas más extremas, los partidos de centroderecha pueden ser el contrapeso y el apoyo de António Costa en sus decisiones principales.

Buena parte del equilibrio político que se observa en Portugal durante esta crisis responde al buen entendimiento que existe entre el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, y de su Primer Ministro, António Costa. Esta buena relación se

ha constatado no solo en el discurso oficial sino también en los gestos: Marcelo Rebelo de Sousa, por ejemplo, entró en cuarentena voluntaria para dar ejemplo ante todos los portugueses de la importancia de las medidas de confinamiento.

Han existido pequeñas diferencias entre algunos alcaldes y el Gobierno, pero se ha debido más a la mala gestión de la comunicación en ambos lados que a grandes diferencias. Es digno de elogio la gestión municipal que se ha observado en grandes núcleos de población como Lisboa, Oporto, Braga, por ejemplo, en estrecha colaboración con los hospitales, la sociedad civil y los departamentos regionales de salud.

Una de las grandes señales de esta crisis está siendo la capacidad de la sociedad civil para participar en la resolución de problemas. Estamos hablando de asociaciones integradas por ciudadanos y acciones altruistas. La naturaleza humana en su mejor momento. El grado de confianza en el Primer Ministro es alto y se ha visto reforzada por la reciente controversia que ha mantenido con el ministro holandés y su postura poco solidaria en el seno de la Unión Europea.

LA SITUACIÓN ECONÓMICA

A diferencia de lo que sucede en una recesión o crisis "normal", la desaceleración económica generada por el COVID19 es decidida y controlada, y tiene como objetivo principal resolver la actual crisis de salud pública. En cualquier caso, esta desaceleración implica inevitablemente costes económicos y sociales, siendo el desempleo una de sus principales manifestaciones.

Una encuesta realizada por la Cámara de Comercio e Industria portuguesa muestra la gran adhesión que ha obtenido el régimen simplificado de despido. El 38,3% de las empresas que han participado en la consulta han admitido recurrir a este régimen creado por el Gobierno.

Los principales sectores afectados por esta situación (en términos del grado de exposición multiplicado por los trabajadores en este sector) son el comercio minorista, los servicios de restauración y los hoteles, lo que refleja la importancia del turismo en la economía portuguesa. El INE señala que el turismo, (más del 11% del PIB), será uno de los sectores más afectados por la crisis actual, con una contracción significativa en su actividad.

Con la evolución de estas cifras, después de tener el primer superávit presupuestario de la democracia en 2019, Portugal puede tener ahora su peor recesión en ese mismo período. Las previsiones para la disminución del PIB varían entre 4% y 20%, pero los economistas son unánimes al anticipar una fuerte recesión para la economía portuguesa en 2020.

Por ahora, todavía no hay pronósticos oficiales del Ministerio de Finanzas, que tiene a su disposición los números de la Autoridad Tributaria que reflejan el impacto del confinamiento en los ingresos fiscales. El Gobierno solo debe actualizar sus proyecciones en el Programa de Estabilidad que deberán entregarse antes del 15 de abril.

Por otro lado, de acuerdo con NECEP - Católica Lisbon Forecasting

Lab (Escuela Católica de Negocios y Economía de Lisboa), se espera que la economía portuguesa se contraiga entre 0.3 y 1.8% en el primer trimestre debido a la caída de la actividad económica. en la segunda quincena de marzo.

Basado en un modelo económico que permite simular el efecto de los shocks en la economía portuguesa, el INE estima este impacto potencial, asumiendo la hipótesis de que la actividad turística, que hasta febrero estaba creciendo, tiene una reducción anual del 25%, tanto en turismo extranjeros, cuyos gastos cuentan como exportaciones de servicios, como en el mercado interno. Esta caída se traducirá en una reducción del 2,9% en el PIB anual en Portugal.

La percepción cada vez más clara de la depresión económica en la que está cayendo el país, los costos económicos y sociales, comienza a abrir una discusión: ¿Cuándo reanudar la actividad económica? - aunque rodeado de una gran incertidumbre sobre cuándo tendrá lugar y en cuanto a las condiciones bajo las cuales las empresas y las familias se encontrarán al comienzo de esta recuperación. En particular, qué carga de deuda tendrán que soportar y qué políticas públicas se seguirán en esta etapa.

IMPACTO EN LOS MEDIOS

Los medios de comunicación de Portugal ya atravesaban dificultades antes de la llegada la crisis del COVID19. Esta pandemia solo ha acelerado y hecho públicas las debilidades que hasta ahora solo conocían los que trabajaban en el sector. Ahora a la caída de ventas en los kioscos hay que añadir la caída también en la inversión publicitaria lo que sumado a los cambios en los hábitos de consumo se ha traducido en el cierre de puntos de venta, la quiebra económica y el intercambio ilimitado de archivos PDF de todas las publicaciones (Este hecho ha generado una carta de denuncia por parte de los directores de los principales periódicos y revistas de Portugal).

Se ha empezado a conocer los primeros despidos en los periódicos y seguramente el proceso continuará porque los problemas de tesorería son comunes a todas las empresas editoriales.

Esta crisis económica de los medios contrasta con las encuestas que acreditan los altos niveles de confianza que generan entre la sociedad portuguesa, especialmente las televisiones que han visto incrementado su consumo, así como los medios online.

Este período también es fértil en las fake news y se presenta como

una oportunidad para afirmar la importancia y la credibilidad del periodista. Queda por ver si habrá tiempo. Y capacidad.

LA SITUACIÓN SANITARIA

El número de muertos e infectados sigue creciendo día a día. Sin embargo, la tasa de crecimiento se ha desacelerado y, en comparación con España e Italia, transmite una “sensación de tranquilidad” que puede ser engañosa. Se sabe que el virus es más mortal en la vejez y los números en Portugal lo demuestran. El 63% de las muertes fueron mayores de 80 años. Y seguramente este escenario negro continuará porque las noticias que provienen de hogares donde sus usuarios están infectados son constantes.

Se ha informado que los hospitales están lidiando con el flujo de pacientes. No solo los hospitales que pertenecen al llamado Servicio Nacional de Salud, SNS, sino también los hospitales privados que ya se han sumado a la lucha común contra el COVID19.

La adhesión portuguesa a la cuarentena y la “retirada social” puede ser el secreto de estos números que han satisfecho incluso a algunos de los más pesimistas. El intento de aplanar la curva parece ser una realidad y, por el momento, se considera que el pico se pudo alcanzar el 31 de marzo.

Habrà que constatar que ésta es la opinión del Gobierno con la posible reapertura de las escuelas proyectada sobre el 4 de mayo.

Como dijo el presidente de la República, “es necesario en abril ganar mayo”, en una clara señal de que tendremos aún más este mes de encierro para que en mayo podamos comenzar a tener estos signos de apertura a una normalidad condicionada.

Sin embargo, también hay indicios de que el 17 de abril, cuando termine este periodo de cuarentena, algunas de las restricciones a la economía pueden levantarse, en un claro intento de mitigar el daño económico.

Una controversia que enfrentamos es si usar máscaras o no. El discurso de DGS es errático en este aspecto desde el principio, más aún cuando se compara con buenos ejemplos provenientes de Asia, y la opinión que cruza la sociedad es que esto es inevitable pero que aún no ha sido aconsejado o decretado por la falta de material. Especialmente porque los médicos también piden a las personas que usen máscaras cuando salen a la calle.

TORRES  CARRERA
consultores de comunicación

guess
what
coolmunication

 **ecovigo**

streamics *lab*
social data consulting

CWA
COMUNICAÇÃO INTEGRADA

MARTINATTO
Publicidad & Marketing

EVIDENTIA®


SHERPA
COMUNICACIÓN

element 

porto
de
ideias

COM *by* **COM**
GRUPO